

Santiago, nueve noviembre de dos mil veintiuno.-

Vistos:

Comparece Eduardo Ecclefield Barbera, abogado, en representación de ABB S.A., ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2233, oficina 501, Providencia, formulando recurso de Reclamación conforme al artículo 19 de la Ley N° 18.410, en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, representada por el Superintendente, señor Luis Ávila Bravo, domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1465, Torre 3, Local 10, Santiago, por la dictación de las Resoluciones Exentas N° 25554 y N° 33800, emitidas por el Director Regional de Antofagasta, con fechas 10 de septiembre de 2018 y 18 de diciembre de 2020, respectivamente.

Pide a esta Corte que se dejen sin efecto las resoluciones reclamadas, como también la sanción impuesta, 900 Unidades Tributarias Mensuales. En subsidio, en resguardo del principio de proporcionalidad, aplicar solo una amonestación por escrito o bien se rebaje sustancialmente la cuantía de la multa.

Expone que los actos en cuestión, se dictaron en el procedimiento administrativo iniciado por un accidente fatal por electrocución, de 6 de junio de 2017, afectando al trabajador Francisco Esteban Olivares Villena, quien se encontraba realizando labores de reparación de equipos en la Planta de Generación Fotovoltaica Bolero, de propiedad de EDF EN Chile.

Agrega, que la Resolución dictada por el Director Regional de Antofagasta lo sancionó por infracción a normas técnicas aplicables en materia sobre corrientes fuertes, normas NSEG 5 y NCH Elec.4/2003 y el Decreto Supremo N° 327 de 1997, que contiene el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, por no disponer de instrucciones claras y precisas atingentes al momento, lugar y a la clase de trabajo a realizar, a fin de evitar todo peligro a las personas, y las cosas, como también, por utilizar personal sin la debida capacitación para realizar un trabajo de alto riesgo, con instalaciones y equipos eléctricos energizados. Precisa que fue rechazado el recurso jerárquico interpuesto en contra de lo resuelto por la autoridad fiscalizadora.



En cuanto a los hechos, detalla que el trabajador accidentado, Ingeniero Civil Electrónico, se desempeñaba en ABB como especialista en servicio técnico, con experiencia, y que al momento del accidente, llevada una semana revisando el alimentador o Feeder 6 de la Planta de Generación Fotovoltaica Bolero, ubicada en Sierra Gorda, Región de Antofagasta, de propiedad de EDF En Chile, quien otorgó permiso a la reclamante para la “revisión y puesta en marcha de inversores”, que se encontraban fuera de servicio por presentar una falla, lo que estima relevante pues la autoridad ha cuestionado la eficacia y validez del Procedimiento de Trabajo aplicado, conocido por el trabajador, el cual detallaba las actividades necesarias para llevar a cabo el cometido de forma segura.

Esa Dirección Regional de Antofagasta formuló cargos por incumplimiento de una variedad de normas y luego fue sancionada en la forma ya dicha, contra la que se interpusieron recursos de reposición y jerárquico, en forma subsidiaria, desconociendo hasta el momento de interponer el presente reclamo la Resolución Exenta N° 33743 de 10 de diciembre de 2020 que rechazó la reposición, confirmando la sanción, en tanto el recurso jerárquico fue resuelto por la Resolución Exenta N° 33800 impugnada mediante el presente libelo y que fue notificada informalmente mediante correo electrónico.

Alega enseguida que en los cargos ha existido una aplicación equivocada de la normativa técnica y reglamentaria, en la medida en que las normas técnicas sobre instalaciones de corrientes fuertes solo son exigibles al propietario de la Planta, y no a la reclamante al igual que a los artículos 210 y 211 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, en tanto las disposiciones sobre instalaciones de consumo de baja tensión, tampoco le son aplicables por dos razones, ya que no regulan plantas de generación fotovoltaica en alta tensión, como en la especie y, además, se refieren a una etapa temprana de los proyectos, lo que tampoco concurre, en atención a que la instalación en que se produjo la falla que se revisaba ya había sido puesta en servicio.

Más adelante señala que la reclamada ha infringido el principio de culpabilidad-responsabilidad, que exige se acredite dolo o culpa del ente fiscalizador, lo que no ocurre pues el accidente fatal se produjo



por omisión de los protocolos de seguridad de ABB y mala manipulación del equipo, lo que se demostró en la investigación llevada al efecto, de la que se desprende que el detector de tensión se encontraba en el interior del vehículo; el trabajador no hizo uso de elementos de protección personal; no utilizó dispositivos de bloqueo ni tampoco hizo uso de otras medidas de control y mitigación que detalla, por lo que debe eximirse a la empresa de todas responsabilidades. Además, insiste en que el trabajador contaba con la experiencia, especialización e idoneidad para el cargo, por lo que la imputación sobre ese respecto tampoco es procedente, añadiendo que se dio asistencia médica de forma casi inmediata al trabajador accidentado.

En otro aspecto, se dice infringido el principio non bis in idem puesto que ha sido sometida la reclamada a tres procedimientos distintos, por los mismos hechos (el de autos, uno ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta y otro por la Dirección del Trabajo), en que igualmente se la sancionó con 600 UTM y 140 UTM y 20 IMM, respectivamente, por los cargos que extensamente detalla, lo que también hace que resulte desproporcionada la sanción impuesta.

Informando la reclamada, afirma que la reclamación es infundada y, por ello, debe ser rechazada en todas sus partes.

Menciona la normativa aplicable, en virtud de la cual le corresponde fiscalizar y supervigilar el cumplimiento, entre otras, verificar la calidad de los servicios prestados a los usuarios, sin peligro para las personas o cosas, como también interpretar y aplicar dichas normas y adoptar las medidas tendientes a corregir las deficiencias advertidas, por lo que tiene la facultad de imponer sanciones.

Agrega que conforme al artículo 139 del Reglamento de la materia, las concesionarias deben mantener sus instalaciones en buen estado de funcionamiento y de operación, además, deben ser seguras; como también, de acuerdo a la Norma NSEG 5 EN 71, se deben evitar peligros, en las instalaciones debe ser imposible por inadvertencia entrar en contacto con las partes en tensión, asimismo, realizarse los trabajos por personal preparado y premunido de equipos apropiados, bajo instrucciones estrictas y protocolos que los trabajadores deben conocer.



Sobre los actos impugnados, explica que al fiscalizar en terreno se determinó que el lugar del accidente no contaba con señalética de limitación de área de trabajo, informativa y de peligros que indica, entre otras en varios módulos, solo se observaba una cinta de peligro; en un módulo faltaba la tapa de mica acrílica de protección, además de otras varias deficiencias que detalla extensamente. Por ello se formularon los cargos y se sancionó en la forma ya dicha.

En cuanto a las alegaciones de la reclamante, indica que los hechos se encuentran plenamente acreditados, que son constitutivos de las infracciones sancionadas, pues quedó de manifiesto que la empresa ha incumplido sus obligaciones, ya que el trabajador no se encontraba preparado ni provisto de elementos de seguridad. En un sentido similar, como especialista en la materia, señala que la reclamante no puede soslayar su responsabilidad en la que le habría de caber a la propietaria de la Planta, pues del análisis de las normas se desprende que las obligaciones son de los operadores eléctricos; todos estos, argumentos que detalla y en que profundiza, destacando que la reclamante reconoció en el procedimiento que los trabajos se realizaron en redes energizadas.

Por razones similares, no proceden las alegaciones relativas a la culpabilidad-responsabilidad, pues ha quedado acreditado que no se tomaron los resguardos adecuados y sin un procedimiento específico ni instrucciones escritas, claras y precisas al trabajador afectado; sin capacitación relativa a ciertos equipos Inversores (Ultra 1400.0-Outd-690) y sin dirección ni vigilancia especializada.

En lo concerniente al principio del non bis in ídem, no concurre, a juicio de la reclamada, la identidad del bien jurídico protegido que exige aquél, en atención a que la autoridad sanitaria vela por el medio ambiente, la Dirección del Trabajo por el cumplimiento de la legislación laboral y la reclamada, la de seguridad en las operaciones y uso de instalaciones eléctricas, por lo que debe desestimarse.

Finalmente, respecto de la cuantía de la multa, atendido el carácter gravísimo de la infracción, pudo aplicarse hasta 10.000 UTA (equivalentes a 120.000 UTM), optándose por solo 900 UTM, que es consistente con la magnitud de la infracción, la participación y



capacidad económica de la empresa y también con el incentivo para evitar reiteraciones.

El Director Regional del Trabajo de Antofagasta, informando a petición de esta Corte, junto con remitir copia de la Resolución de Multa N° 1648/17/49 dictada por la Inspección de Trabajo de Antofagasta, de 7 de julio de 2017, comunica que las cuatro infracciones aplicadas por la resolución de Multa N° 1648/1/49 de acuerdo a lo indicado por la Tesorería General de la República, fueron pagadas mediante “Banco en Línea” el 19 de octubre de 2017.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de la causa.

Considerando:

Primero: De acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley N° 18.410 el afectado por una resolución originada en un procedimiento sancionatorio puede *“reclamar”* ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando estime que aquella no se ajusta *“a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponde aplicar”*. De esto se colige que se está en presencia de un arbitrio de control de los actos de la Administración, lo que trae consigo que este tribunal deba efectuar una revisión de legalidad del procedimiento o de la sanción impuesta, según fuere el contenido del reclamo formulado;

Segundo: La reclamante se remite, en cuanto a la presunta ilegalidad en que habría incurrido la Superintendencia, el haberle atribuido responsabilidad en los términos que establece el artículo 139 de la ley, en cuanto al deber del concesionario de mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligros para las personas o cosas, en circunstancias que, según expresa, la Norma Técnica NSEG 5 EN 71 (Electricidad. Instalaciones Corrientes Fuertes) y NCH Elec. 4/2003 (Instalaciones de Consumo Baja Tensión) y, artículos 210 y 211 del Reglamento de la Ley, aplica a los propietarios de una obra, no así a las subcontratistas, como es su caso y, por otra quien resultó afectado contaba con las calificaciones correspondientes;

Sin embargo, como lo ha sostenido la reclamada, cobra también vigencia el artículo 205 del Reglamento de la Ley General de Servicio Eléctricos, que complementando el referido texto legal, impone al operador de instalaciones eléctricas en servicio, mantenerlas en buen



estado de conservación y en condiciones de evitar peligro para las personas, el deber de preservar el normal funcionamiento de las instalaciones de otros concesionarios de servicios públicos. Se trata por tanto, no sólo de ejecutar el trabajo de mantención en una obra determinada, sino que corresponde además al, operador, en este caso, subcontratista, hacerlo en forma tal, que se evite la ocurrencia de hechos como el sucedido;

Tercero: Precisar que los artículos 210 y 211 del Reglamento de la Ley, disponen, la primera, que las instalaciones de corrientes fuertes deben ser ejecutadas y mantenidas de manera evitar todo peligro para las personas y, la segunda disposición, que los trabajos en redes energizadas deben ser efectuadas por personas calificadas y autorizadas. Por su parte las normas técnicas citadas están orientadas en el mismo sentido;

Cuarto: Lo cierto es que la reclamante no cumplió con los requisitos de seguridad que debían existir en la instalación de la Planta Fotovoltaica Bolero, en su calidad de operador de la obra, por una mala ejecución de obras de mantenimiento, producto sólo de una conducta negligente que hace procedente la sanción, no sirviendo como suficiente excusa la experiencia, conocimiento y calificación que tendría el trabajador en la tarea que desarrollaba al momento de recibir la carga eléctrica, ya que lo exigido era que la labor se ejecutara con todas las exigencias establecidas en materia de instalaciones eléctricas, lo que no aconteció;

Quinto: Por su parte el principio de culpabilidad se cumple con la comprobación que la acción constitutiva de infracción resulte atribuible al infractor. En este contexto, la pretensión del actor en cuanto a que respecto de su conducta se exija dolo, no se condice con la lógica propia del derecho administrativo regulador y sancionador.

Es así como la Excma. Corte Suprema, en relación con la prueba de la culpabilidad en materia de sanciones administrativas, en sentencia pronunciada el 7 de enero de 2011 en los autos rol N° 536-2006, sostuvo que apreciar la culpabilidad conforme a la naturaleza administrativa, importa acreditar el hecho en que sustenta la responsabilidad, sin exigencias adicionales propias del derecho penal, puesto que la sola circunstancia de que no se cumplan las exigencias de



la norma administrativa, permite concluir que la actuación fue maliciosa.

De modo que la función de la sanción administrativa corresponde más bien a la prevención general que al sancionar, la administración emite “*señales*”, orienta la actividad privada, indicando los límites de lo que es admisible o no, reafirmando la vigencia de la norma a través de la sanción:

Sexto: El reclamante se remite el principio non bis in ídem, argumentando que la infracción cursada por la SEC se encuentra contenida en las infracciones que le fueron impuesta por la Secretaría Ministerial Regional de Salud y la Dirección del Trabajo, de modo que no se le puede sancionar nuevamente por la misma conducta, sin embargo, cabe considerar que el bien jurídico protegido, en el caso, es la seguridad en la operación y mantención de instalaciones eléctricas, en cambio la sanción impuesta por la autoridad sanitaria está orientada a la persona fallecida y, la autoridad laboral, a materia de carácter laboral y previsional;

Séptimo: En la determinación de las infracciones cometidas por la empresa y en la regulación del quantum de la multa, hay que considerar que aquélla ha incurrido en fallas de carácter gravísimo, cual fue la muerte de un trabajador. Por su parte, la cuantía de la multa resulta razonable y proporcional a la naturaleza de los hechos investigados, por lo que ésta se fijó dentro de los parámetros establecidos por el artículo 16 A de la Ley N° 18.410, que permite aplicar a las faltas gravísimas una multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales, en circunstancias que a la reclamante se le reguló la cuantía de la multa en novecientas unidades tributarias mensuales, teniendo en consideración su participación y capacidad económica y la necesidad de generar señales adecuadas para evitar la reiteración de hechos como los sancionados.

En consecuencia no resulta procedente acceder a la aplicación de una medida menor intensidad como la de amonestación por escrito, ni la rebaja de la multa impuesta;

Octavo: En tales condiciones, el reclamo debe ser necesariamente declarado sin lugar.

HXKRKYHRC



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes de la Ley N° 18.410, se **rechaza** sin costas el reclamo deducido en contra de las Resoluciones Exentas N° 25554 y N° 33800, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Barrientos Guerrero.

N°6-2021 Contencioso Administrativo.-

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Omar Astudillo Contreras y señora Elsa Barrientos Guerrero.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Omar Antonio Astudillo C., Elsa Barrientos G. Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

